STSJPV de 24 de diciembre de 2002

En Bilbao, a veinticuatro de diciembre de dos mil dos.

Vistos por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, integrada por los Magistrados del margen, en el recurso de casación contra la sentencia que con fecha 5 Feb. 2002, dictó la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia, como consecuencia de autos de Rollo de Apelación 108/01 dimanante de Juicio de Menor Cuantía núm. 665/99 seguido ante el Juzgado de 1ª Instancia núm. 1 de Barakaldo, sobre impugnación de las operaciones contenidas en el cuaderno particional emitido por D. Ildefonso con fecha 22 Abr. 1999 en el procedimiento de separación matrimonial seguido bajo el núm. 108/83 ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Barakaldo, cuyo recurso fue interpuesto por D. Alejandro, representado por el Procurador Sr. D. Germán Ors Simón y asistido del Letrado Sr. D. Gonzalo Vidorreta Lasa, interviniendo como recurrido D.ª Soledad, representada por el Procurador Sr. D. Francisco Javier Zubieta Garmendía y asistida del Letrado Sr. D. Juan Ignacio Sasiain Urra.

ANTECEDENTES DE HECHO.

Primero. La Procuradora de los Tribunales D.ª María Teresa Lapresa Villandiego, en nombre y representación de D. Alejandro, formuló ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Barakaldo, demanda de juicio declarativo de menor cuantía, el cual quedó registrado con el núm. 665/99, impugnando las operaciones contenidas en el cuaderno particional emitido por D. Ildefonso con fecha 22 Abr. 1999 en el procedimiento de separación matrimonial seguido bajo el núm. 108/83 ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Barakaldo, decretando la necesidad de incluir en el activo de la sociedad conyugal a liquidar los siguientes bienes: 1. Los inmuebles reseñados bajo los números 1 a 21 en el cuaderno particional formulado por el Letrado D. Gonzalo Vidorreta Lasa con fecha 12 May. 1997 con cargo a los autos de separación matrimonial antes indicados, bienes consistentes en los inmuebles adquiridos por D.ª Soledad por herencia de D.ª Soledad y D.ª Diana. 2. 944 acciones del Banco Popular Español, más las que se hubieren obtenido como consecuencia del mantenimiento de su titularidad desde el año 1983 hasta la actualidad. 3. 1.690 acciones de Iberduero, en lugar de las 1.536 acciones reseñadas en el activo, más las que se hubieren obtenido como consecuencia del mantenimiento de su titularidad desde el año 1983 hasta la actualidad. Todo ello con expresa imposición a la demandada D.ª Soledad de las costas causadas.

Asimismo el Procurador de los Tribunales D. Francisco Javier Zubieta Garmendía, en nombre y representación de D.ª Soledad, formuló ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Barakaldo, demanda de juicio declarativo de menor cuantía, a la que correspondió el núm. 666/99, sobre liquidación de la sociedad de gananciales, contra D. Alejandro, solicitando se dicte sentencia, en la que estimando la demanda, se proceda a la liquidación de la sociedad de gananciales, previo inventario y

avalúo, para su posterior adjudicación de los bienes que componen la misma, con expresa condena en costas a la parte demandada.

Por auto de dicho Juzgado, con fecha de 25 Ene. 2000, se acordó la acumulación a la primera demanda de la segunda, tramitándose en un solo juicio.

Por la Procuradora D.^a María Teresa Lapresa, en nombre de su representado, se presentó escrito contestando a la demanda articulada por D.^a Soledad, suplicando se dicte sentencia por la que se desestimase en su integridad la demanda, con expresa imposición a la demandante de las costas causadas. Igualmente, por el Procurador D. Francisco Javier Zubieta Garmendia, se presentó escrito, procediendo a contestar y oponerse a la demanda formulada por D. Alejandro, suplicando se dictase sentencia, desestimando la demanda y estimando a su vez su demanda, procediendo a la liquidación de la sociedad de gananciales, previo inventario y avalúo, para su posterior adjudicación de los bienes que componen la misma, con imposición de costas a D. Alejandro.

Practicadas las pruebas declaradas pertinentes, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Barakaldo, dictó sentencia con fecha 1 Dic. 2000, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLO: Que estimando parcialmente la demanda formulada por la Procuradora Sra. Lapresa Villandiego, en representación de D. Alejandro, contra D.^a Soledad, representada por el Procurador Sr. Zubieta Garmendia, y estimando de igual modo la interpuesta por ésta frente a aquel, debo aprobar y apruebo las Operaciones Particionales contenidas en el Cuaderno confeccionado por el Contador Partidor D. Ildefonso con fecha 22 Abr. 1999, con las modificaciones contenidas en el Razonamiento Jurídico Décimo de la presente resolución, derivadas de la exclusión del Inventario común de las Acciones de Iberduero que luego fueron adjudicadas a la Sra. Soledad, lo que implicará que la suma que el Sr. Alejandro deberá abonar a la Sra. Soledad para compensar de las Adjudicaciones realizadas a cada uno, ascenderá a dos millones ochocientos veintinueve mil pesetas (2.829.000 ptas.). Todo ello, sin hacer especial declaración en cuanto a las costas procesales causadas.

Segundo. Interpuestos recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia por ambas partes y una vez emplazadas las mismas y remitidos los autos, dichos recursos fueron tramitados por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, quien dictó sentencia con fecha 5 Feb. 2002, con el siguiente fallo: Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Alejandro y desestimando el formulado por la representación procesal de D.^a Soledad, debemos revocar y revocamos parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado de la Instancia núm. 1 de Baracaldo, con fecha 1 Dic. 2000, en los autos de juicio de menor cuantía 665/99, y ello en el único sentido: 1^a) de desestimar la demanda interpuesta por la representación procesal de D.^a Soledad, y 2^a) dejar sin efecto las modificaciones que establece el cuaderno particional confeccionado por D. Ildefonso, el

que procede aprobar y mantener de forma íntegra y en sus propios términos, debiendo confirmarse la sentencia en lo demás, y todo ello sin verificar expresa condena en las costas de esta alzada, a salvo las derivadas del recurso de apelación interpuesto por D.^a Soledad que se imponen a la misma.

Tercero. Por el Procurador D. Germán Ors Simón, en nombre y representación de D. Alejandro, se interpuso recurso de casación en base a las siguientes alegaciones: 1^a) Objeto del presente recurso, 2^a) Vulneración de los artículos 42 y 43 de la Ley de 30 Jul. 1959 de Compilación del Derecho Civil Foral de Vizcaya, al no incluir en el activo de la sociedad a liquidar las 944 acciones del Banco Popular Español y sus frutos y rentas correspondientes, 3^a) Vulneración de los artículos 42 y 43 de la Ley de 30 Jul. 1959 de Compilación del Derecho Civil Foral de Vizcaya, al no incluir en el activo 154 acciones de Iberdrola y sus frutos y rentas correspondientes y 4^a) Vulneración del artículo 45 párrafo segundo de la Ley de 30 Jul. 1959 de Compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya en relación con los artículos 1390, 1397-2^o y 1347-2^o del Código Civil, al no admitir la valoración del importe actual de las acciones fraudulentamente enajenadas por D.^a Soledad.

Por ello y por las alegaciones contenidas en dicho escrito, suplicaba se dictara en su día sentencia casando la resolución impugnada, acordando incluir en el activo de la sociedad matrimonial a liquidar, las siguientes partidas, adjudicando las mismas a D.^a Soledad, con las consiguientes modificaciones de las adjudicaciones a verificar, en ejecución de Sentencia, por el Juzgador de Instancia: 1. 3.776 acciones del Banco Popular Español, con su valor de 20.575.424 ptas., es decir 123.660,79 euros. 2. Dividendos líquidos y primas derivados del mantenimiento de la titularidad de las antedichas acciones, por su valor de 7.340.676 ptas., es decir, 44.118,35 euros. 3. 2.495 acciones de Iberdrola, por su valor de 5.903.170 ptas., es decir, 35.478,77 euros, debiendo esta partida sustituir a la de 1.536 acciones de la misma entidad por su valor de 3.832.320 ptas. obrante en el cuaderno particional y 4. Dividendos líquidos y primas derivados del mantenimiento de la titularidad de las antedichas acciones, por su valor de 1.934.783 ptas., es decir, 11.628,28 euros.

Cuarto. Con fecha 29 May. se recibieron en esta Sala de lo Civil los autos correspondientes a la primera y segunda instancia a efectos de la resolución del recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 5 Feb. 2002 por la Sección 4^a de la Audiencia Provincial de Bizkaia en el Rollo menor cuantía núm. 108/01. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 483.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acordó pasar las actuaciones al Magistrado Ponente para que previa instrucción, sometiera a deliberación de la Sala lo que hubiera de resolverse sobre la admisión o no del recurso de casación.

Quinto. En fecha 12 Jul., se dictó auto declarando la competencia de la Sala para conocer del recurso de casación interpuesto por D. Alejandro, representado por el

Procurador D. Germán Ors Simón, contra Sentencia dictada por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial y declarar asimismo la admisión del mencionado recurso.

Sexto. Con posterioridad, se personaron en las actuaciones los Procuradores de los Tribunales D. Germán Ors Simón en nombre y representación de D. Alejandro, bajo la dirección letrada de D. Gonzalo Vidorreta Lasa, en calidad de parte recurrente y el Procurador D. Francisco Javier Zubieta Garmendia en nombre y representación de D.ª Soledad y bajo la reacción letrada de D. Juan Ignacio Sasiain Urrea, en calidad de parte recurrida en casación. A ambos procuradores se les tuvo por personados y partes.

En proveído de misma fecha, 23 Jul., se acordó dar traslado a la parte recurrida del escrito de interposición del recurso de casación, para que formalizase su oposición por escrito en el plazo de veinte días y manifestase si consideraba necesaria la celebración de vista.

Séptimo. Por la parte recurrida se presentó oposición a dicho recurso de casación, en la cual se hicieron las alegaciones que se tuvieron por convenientes y se terminó suplicando se dictara sentencia acordándose la desestimación del recurso por no existir motivo alguno para su interposición y para su admisión y en todo caso desestimar el mismo por no proceder estimación alguna de sus alegaciones y peticiones, con imposición de costas a la parte recurrente. Asimismo, solicitaba la celebración de vista de conformidad con lo dispuesto en el art. 474.22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Octavo. Finalmente y no considerándose necesaria la celebración de la vista, se señaló día y hora para votación y fallo, lo que se llevó a efecto conforme a lo acordado.

Ha sido ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Julian María Arzanegui Sarricolea, quien expresa el criterio de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Al formalizar la parte recurrida su oposición al recurso interpuesto, en virtud del traslado que se le confirió, objetaba en primer término la inadmisibilidad del recurso, haciendo uso para ello, aunque sin mencionarla, de la oportunidad que le confiere el párrafo segundo del art. 485 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No obstante, al razonar esa misma parte acerca de su indicado planteamiento de inadmisibilidad, se limitó a realizar una invocación genérica del art. 477 de la citada Ley Procesal, pero sin expresar cuál era el concreto motivo por el que entendía incumplido el referido precepto.

Por ello y porque el citado art. 485 de la Ley de Enjuiciamiento establece que han de ser alegadas las causas de inadmisibilidad que la parte considere existentes, no cabe entrar de nuevo en examen de la misma materia, al no ser oportuno que esta Sala haya de repetir, por efecto de esa inconcreta alegación, el análisis, ya realizado de oficio

en cumplimiento de lo establecido en el art. 483.1 de la Ley Procesal, sobre la existencia de alguna de las causas legales que hubieran podido impedir la admisión del recurso.

Segundo. El escrito de interposición del recurso formula tres motivos de casación, que expone bajo la denominación de alegaciones segunda, tercera y cuarta, por estar dedicada la primera a manifestar la renuncia a la interposición del recurso respecto de una de las cuestiones anunciadas al prepararlo, así como a razonar que el valor de las demás materias recurridas alcanza la cifra de 31.921.733 ptas.

Previamente al examen de los razonamientos expuestos por el recurrente, conviene indicar que la cuestión litigiosa deriva de la separación matrimonial de los cónyuges litigantes y de la ejecución de sus efectos patrimoniales, habiendo sido planteada por el ahora recurrente al oponerse a las operaciones liquidatorias de la sociedad conyugal practicadas por el contador dirimente; a lo que se ha de añadir que el régimen disuelto, que había venido rigiendo la economía de los cónyuges, era el de la comunicación foral de bienes, como se afirmaba en el escrito inicial del incidente de oposición, sin objeción de la otra parte.

En el primero de los fundamentos del recurso se denuncia que la sentencia recurrida ha infringido, por no aplicación, lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Compilación de Derecho Civil de Vizcaya y Álava de 1959, que era la ley vigente al tiempo en que se produjo la disolución, del régimen económico del matrimonio.

Sin embargo, es patente que la sentencia de la Audiencia Provincial no desconoce que el régimen normativo de la economía de los cónyuges contendientes era el de la comunicación foral de bienes, sino que, por el contrario, expresamente parte de ese supuesto, por lo que no ha podido vulnerar el art. 42 de la Compilación, que se limitaba a establecer, cuando el marido fuera vizcaíno infanzón, la vigencia de la comunicación foral como régimen legal supletorio de primer grado, a falta de contrato sobre los bienes.

Y de igual manera, no cabe apreciar la infracción del art. 43 de la misma Compilación, porque la sentencia recurrida tampoco desconoce que por virtud de la comunicación foral se hagan comunes entre los cónyuges todos sus bienes, cualquiera que sea su procedencia y el título, oneroso o gratuito, de su adquisición, sino que razona cuáles son los efectos de la comunicación foral en el caso en que el régimen económico se disuelva por causa de separación conyugal.

En el Derecho Foral de Vizcaya, reducido hoy a regular el régimen de los bienes en la familia, tiene singular relevancia la institución de la troncalidad, en cuanto significa, dentro de la organización familiar, la vinculación a ella de los bienes raíces que le pertenezcan, y es de ahí de donde deriva la preeminencia que el Derecho Foral reconoce al matrimonio, como comunidad de vida que establecen los cónyuges para perpetuar, a través de ella, la familia troncal. Es así como el rango fundamental que ostenta el matrimonio en el Derecho de Vizcaya tiene su reflejo en el plano económico,

donde se refuerza la unión de los cónyuges mediante el régimen de la comunicación foral de los bienes entre ellos.

Tanto el Fuero Nuevo de 1526 como la Compilación de 1959 sólo contemplaban, de manera expresa, la extinción de la comunicación foral de bienes en el supuesto de muerte de uno de los cónyuges, estableciendo distintas soluciones --habida cuenta de lo dicho sobre la relación del matrimonio con la troncalidad-- según que el fallecimiento ocurriera dejando o no descendientes comunes, pero ambos textos carecían de regulación específica para los supuestos en los que la disolución del régimen se produjera en vida de los consortes.

Sin embargo y pese al silencio de los citados textos legales para casos como el del presente proceso, es de notar que se trata de situaciones en las que se ha truncado la comunidad de vida de los cónyuges, que es la realidad sobre la cual se asienta el régimen legal de la comunicación de sus bienes, siendo consecuente con los principios que rigen la institución que en tal caso la comunidad pase a recaer exclusivamente sobre los bienes ganados o conquistados por los consortes, excluyendo de ella los bienes que procedan de cada uno de los esposos, a quienes pertenecerán en exclusiva los de su respectiva procedencia.

En estos supuestos, producida la disolución del régimen económico del matrimonio en virtud de lo dispuesto en el art. 95 del Código Civil, la liquidación de la comunicación foral se efectuará exclusivamente como comunidad de ganancias, llevándose a cabo con arreglo a las normas de la legislación foral y, en su caso, en calidad de supletorias, por las del Código Civil.

Hechas las precisiones que anteceden, resulta que la infracción legal que en este motivo del recurso se atribuye a la sentencia recurrida radica en que dicha resolución desestimó la pretensión del recurrente de incluir en el activo de la comunidad conyugal disuelta una partida por el valor de 944 acciones del Banco Popular Español, con sus dividendos, que habían sido vendidas por la esposa recurrida D.^a Soledad el año 1983, por lo que considera que se vulnera el antes citado art. 43 de la Compilación de Derecho Civil de Vizcaya de 1959.

Sin embargo y conforme a la motivación de la sentencia recurrida, resulta que la razón de excluir la referida partida no deriva de la interpretación del citado precepto foral, sino de la apreciación de la Sala acerca de que las acciones de que se trata, aunque bajo la titularidad nominal de la esposa D.^a Soledad, titular también de su depósito bancario en custodia, no habían sido adquiridas por ella ni pertenecieron en realidad a la sociedad conyugal, sino que eran propiedad de D.^a Diana, tía de la Sra. Soledad. Y es precisamente esa apreciación la que el recurrente se dedica extensamente a rebatir a través del análisis de los documentos que menciona en su escrito, aunque no tenga en cuenta que, tratándose de una mera cuestión de hecho, su apreciación es facultad soberana de la Sala de instancia, sin que el posible error en la valoración probatoria pueda ser denunciado en el recurso de casación, según se desprende de lo dispuesto en

el art. 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por todo ello, el motivo ha de ser rechazado.

Tercero. En el segundo de los motivos del recurso se denuncia la infracción de los mismos artículos 42 y 43 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya.

Trata este motivo del recurso de la apreciación del recurrente acerca del número de las acciones de Iberdrola que debían incluirse en el activo de la sociedad conyugal, sobre lo cual afirma que las inventariadas en las operaciones particionales fueron 1536 acciones, cuando entiende que debieron ser 1690, por lo que impugna la sentencia recurrida en cuanto desestimó su pretensión formulada en tal sentido.

Sin embargo, dado que las expresadas acciones de Iberdrola también habían sido vendidas por la esposa D.^a Soledad, lo que procedía inventariar en el cuaderno particional, tal como se hizo, fue su valor y, en cuanto al problema del número de las acciones que habían de ser tenidas en cuenta, la sentencia recurrida expresamente dejó de lado esa cuestión, por considerarla intrascendente, al apreciar que la valoración consignada en el inventario excedía sobradamente de la que podía corresponder al número de acciones pretendido por el recurrente.

Resulta de ello que también la impugnación contenida en este motivo del recurso se refiere a una cuestión de mero hecho, respecto de la cual no cabe el control de la casación, que según el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sólo puede fundarse en la infracción de las normas aplicables para resolver la cuestión litigiosa, por lo que es improcedente basarlo, como hace el recurso, en el análisis de los documentos e informes obrantes en los autos, cuya apreciación corresponde en exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia, lo que hace que el motivo que se examina deba ser desestimado.

Cuarto. El tercero y último de los motivos del recurso acusa la infracción del art. 45, párrafo segundo, de la Compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya de 1959, en relación con los artículos 1390, 1397-2º y 1347-2º del Código Civil, a cuyas vulneraciones añade en su desarrollo la del art. 44 de la citada Compilación.

Las infracciones que se denuncian de todos los indicados preceptos van dirigidas a defender el criterio del recurrente sobre la manera como deberían valorarse, en las operaciones particionales de la sociedad conyugal que mantuvieron aquel y su esposa, las acciones del Banco Popular Español y de Iberdrola a las que se refieren los dos motivos anteriores, que según esa opinión debe comprender tanto el valor actual de los citados títulos, como los rendimientos de todo tipo que hubieran debido producir desde la fecha de su enajenación.

De los dos preceptos forales que se dicen vulnerados, el párrafo segundo del art. 45 de la Compilación contenía remisión expresa al Código Civil para regular la materia de la enajenación de los bienes muebles pertenecientes a los cónyuges y el art. 44

establecía que la comunicación foral no es opuesta a la existencia de bienes gananciales, remitiéndose también al Código Civil para la determinación de los que tuvieran esa condición, por lo que la posible violación de dichos artículos ha de ser entendida a través de los del Código Civil a los que envían con carácter supletorio.

Por otro lado y en cuanto a la infracción de los artículos citados del Código Civil, el motivo los engloba sin expresar el concepto en el que cada uno haya podido ser violado, con lo que incumple lo dispuesto en el art. 481.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el 477.1 de la misma Ley, en cuanto que la fundamentación del recurso ha de razonar la supuesta infracción de cada una de las normas invocadas que sean aplicables al caso y en cuya vulneración haya podido incurrir la sentencia recurrida.

Pero aparte de ello, el art. 1347.2º del Código Civil no ha sido infringido, porque el precepto establece que entre los bienes gananciales se comprenden los frutos, rentas e intereses producidos por los bienes de los cónyuges, pero no se refiere a los rendimientos que, de acuerdo con los cálculos verificados por el recurrente, hubieran debido producir.

En cuanto al art. 1390 del Código, que está comprendido en la Sección relativa a la administración de los bienes de la sociedad ganancial, el precepto parte de la ejecución por uno de los cónyuges de un acto de administración o de disposición y de que, mediante tal acto, ese cónyuge haya obtenido un lucro exclusivo o causado dolosamente un daño a la sociedad. La producción de ambos efectos (existencia de lucro exclusivo para un cónyuge o de daño social causado dolosamente) no está entendida en la ley como presunción derivada del acto de disposición o de administración llevado a cabo, sino como un hecho cuya realidad ha de ser expresamente declarada, sin que en el caso presente la sentencia recurrida considere probado que la disposición de las acciones llevada a cabo por D.^a Soledad le originara un beneficio exclusivo para sí, ni produjera un daño causado dolosamente a la sociedad conyugal, que son los dos supuestos en los que la actuación unilateral del cónyuge da lugar al nacimiento de un crédito a favor de la sociedad por el mismo importe del beneficio o del daño, y por tanto, respecto de ambos extremos, como cuestión de hecho que son, se ha de respetar la apreciación de la sentencia recurrida. A lo que cabe añadir que, de acuerdo con los términos del artículo, según entiende la más solvente doctrina, tanto el beneficio como el daño tendrían que derivar precisamente del acto de administración o de disposición realizado, en calidad de consecuencia directa e inmediata de ellos, y no ser resultado de operaciones o actuaciones posteriores; así como que, en el caso de daño, la responsabilidad del cónyuge alcanzaría únicamente al quebranto causado en los bienes de la sociedad y no al lucro cesante, que no cabe entender comprendido en el concepto de daño que emplea el precepto.

Finalmente y por lo que se refiere a la supuesta vulneración del art. 1397.2º del mismo Código Civil, su texto claramente expresa que entre las partidas que han de

integrarse en el activo de la sociedad conyugal se comprenderá el importe actualizado del valor que tenían los bienes al ser enajenados por negocio ilegal o fraudulento, por lo que, partiendo de que concurre el supuesto legal de la enajenación efectuada unilateralmente por la esposa --supuesto del que también parte la sentencia recurrida, el valor a considerar no habría de ser el que tuviera el bien dispuesto en el momento de practicarse las operaciones liquidatorias del caudal conyugal, como gratuitamente sostiene el recurrente, sino el valor que tenía el bien al ser enajenado --que es cosa distinta del valor de enajenación, aunque ambos puedan coincidir--, actualizado al momento de la liquidación, como con pleno acierto y a través de una detenida exposición resuelve la Sala de instancia. En consecuencia, ha de ser desestimado igualmente el presente motivo y, con él, el recurso en su integridad, procediendo por tanto la confirmación de la sentencia recurrida, de conformidad con lo que dispone el art. 487.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinto. La desestimación del recurso lleva consigo la imposición al recurrente de las costas causadas, según establece el art. 398.1, en relación con el 394.1, ambos de la Ley Procesal Civil.

Y por los razonamientos expuestos, vistos los preceptos citados, los invocados por las partes y demás de aplicación general,

FALLAMOS:

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar a la casación de la sentencia que con fecha 5 Feb. 2002 dictó la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia en el rollo de apelación número 108/01, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía número 665/99 del Juzgado de 1ª Instancia número 1 de Barakaldo, por lo que debemos confirmar y confirmamos la expresada resolución recurrida. E imponemos a la parte recurrente el pago de las costas del recurso.

Y a su tiempo, devuélvanse a la Sala de origen los autos y el rollo de Sala que remitió, con testimonio de la presente resolución. Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.